

Z|E ZONA DE ESTRATEGIA

Memoria del procés independentista catalán (I)

Antonio Santamaría

Existe una cierta discusión sobre el inicio del proceso soberanista. Para algunos, arrancó con la gran manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de julio de 2010 sobre el *Estatut d'Autonomia* de 2006, que precipitó la caída del segundo tripartito de izquierdas —presidido por el socialista José Montilla— y la amplia victoria de Artur Mas al frente de *Convergència i Unió* (CiU) en noviembre de ese mismo año.

Esta sentencia abrió una profunda grieta institucional, como ha indicado Jordi Amat. Catalunya es la única comunidad autónoma cuyo estatuto no es el aprobado por el *Parlament de Catalunya*, cepillado por las Cortes españolas y refrendado por la ciudadanía, sino el enmendado por el Tribunal Constitucional (TC). Para amplios sectores del movimiento nacionalista, esto supuso la ruptura de los pactos de la Transición, dejando expedito el camino hacia la autodeterminación de Catalunya. Para otros, el *procés* empezó con la gran manifestación independentista de la *Diada* del 11 de septiembre de 2012, organizada por la *Assemblea Nacional de Catalunya* (ANC) y *Òmnium Cultural* (OC).

1. Preludio soberanista (2009-2012)

Resulta imposible analizar el *procés* soberanista sin tener en cuenta los efectos de la crisis financiera de 2008, que golpeó con particular virulencia una economía cimentada en la construcción. El estallido de la burbuja inmobiliaria liquidó las cajas de ahorro catalanas, que habían apostado fuerte por el ladrillo, y generó una cadena interminable de desahucios que condujeron a la constitución de la *Plataforma de Afectados por la Hipoteca* (PAH), cuya portavoz, Ada Colau, sería la primera alcaldesa de Barcelona.

Al principio de su mandato, Artur Mas se comportó como uno de los discípulos más aventajados de Ángela Merkel y la *troika* comunitaria, que exigían severos recortes en el gasto público y en los servicios sociales. Sin mayoría absoluta, contó con el respaldo del PP. Mientras tanto, el agonizante presidente Zapatero aprobaba por la vía exprés, en agosto de 2011, también con el apoyo del PP, la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución,

que consagra el principio de “*estabilidad presupuestaria*” para que el pago de la deuda sea prioritario frente a cualquier gasto del Estado.

La severidad del ajuste sobre la clase trabajadora desembocó en tres huelgas generales (29S de 2010, 29M y 14N de 2012); pero, sobre todo, en la eclosión del 15M. El movimiento de los indignados acampó durante semanas en la céntrica *plaça de Catalunya* de Barcelona. El 27 de mayo de 2011, el *conseller* Felip Puig ordenó a los *Mossos d’Esquadra* su desalojo por la fuerza, donde fue aporreado David Fernández, futuro diputado de la formación independentista y anticapitalista *Candidatura d’Unitat Popular* (CUP). Como respuesta, el 15 de junio los indignados rodearon el *Parlament* con la histriónica entrada en helicóptero del *president* Mas. Por su parte, el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, publicó un artículo en *Nació Digital* (17/6/2011), en el que manifestaba su rechazo a un movimiento que calificó de españolista:

“Tienen, como españoles, todo el derecho del mundo a indignarse. Pero si quieren hacerlo, como españoles, lo mejor es que no se equivocasen en el mapa y se manifesten, se indignen, se meen, pinten, chillen e insulten allí donde les corresponde, en su país.”

Una toma de posición que excluía de la catalanidad a unos jóvenes nacidos y criados en Catalunya.

Años más tarde, en diciembre de 2014, el exalcalde de Figueres y *conseller* de la Generalitat, Santi Vila, confesó que el 15M disparó todas las alarmas. Era preciso construir un “*proyecto mínimamente ilusionante*” para frenar a una ciudadanía harta de recortes que acabaría echándolos a la calle.

Las semillas del pujolismo

Durante las presidencias de Jordi Pujol (1980-2003), al frente de *Convergència Democràtica de Catalunya* (CDC), se crearon las condiciones culturales, sociales y políticas —la lluvia fina— sin las cuales resulta incomprensible el éxito del nuevo independentismo de masas. El *president* Pujol, tras la larga dictadura que persiguió la lengua y la cultura catalanas, lideró desde el centroderecha nacionalista un programa de (re)construcción nacional sobre dos ejes. Por un lado, levantar las instituciones de autogobierno con la constante demanda de nuevas competencias al Estado, pero sin salirse del marco autonómico. Por otro, la promoción de la lengua catalana como lengua propia del país. Los decretos de inmersión (1992), que eliminaron el castellano —idioma de la mitad del alumnado— como lengua vehicular de la enseñanza obligatoria, marcan el punto de inflexión de una interminable guerra lingüístico-cultural.

Acaso no sea exagerado afirmar que el independentismo, parafraseando a Lenin, es la fase superior del pujolismo. En cualquier caso, el ascenso del independentismo estuvo precedido por la renovación generacional anunciada en el X Congreso de CDC (1996), cuando accedieron a la dirección del partido los jóvenes dirigentes soberanistas que

pilotarían el *procés*. Años antes, en el Congreso de Lleida (1989), ERC modificó sus viejos estatutos republicano-federales y se reconvirtió en un partido independentista. Una operación liderada por Àngel Colom que fue premiada electoralmente. En las catalanas de 1992, con el lema *Cap a la Independència*, ERC se convirtió en la tercera fuerza política del país con 210.000 votos, 11 diputados y en el polo de reagrupamiento de las dispersas y fragmentadas fuerzas del independentismo catalán.

Por otro lado, la crisis industrial de finales de los 70, como ha estudiado el historiador británico Sebastian Balfour, quebró la espina dorsal del combativo movimiento obrero del Área Metropolitana de Barcelona, que provenía de la gran oleada migratoria de los 60 desde los pueblos del sur de España a las fábricas de Catalunya. El informe de James Petras, sociólogo y colaborador de Noam Chomsky, publicado por la revista *Ajoblanco* en 1995, mostró los devastadores efectos en la Gran Barcelona del final del modelo fordista de acumulación capitalista, con sus grandes fábricas y densos barrios obreros, así como las consecuencias de las políticas neoliberales, con unas de las tasas de paro juvenil y precariedad laboral más elevadas de Europa.

A diferencia de sus padres, había desaparecido el trabajo estable en la fábrica como medio de vida y escuela de lucha sindical y política. Paralelamente, los miles de funcionarios de la administración autonómica proporcionaron empleo a los cuadros técnicos y profesionales que la crisis industrial habría dejado en el paro. Aquí radica, según el historiador Josep Maria Fradera, una de las claves del éxito del pujolismo.

Durante los 23 años del pujolismo, se asistió a un doble y simultáneo movimiento de recomposición cultural e ideológica de las clases medias catalanohablantes en torno a la lengua catalana y la ideología nacionalista, al tiempo que se produjo la desestructuración y aculturación de la clase trabajadora de lengua castellana. Entre los sectores más radicales del independentismo se va abriendo paso la tesis según la cual en Catalunya existen, por un lado, los catalanes étnicos o asimilados, cuyo referente nacional es Catalunya, y los españoles que viven en Catalunya como podrían residir en cualquier otra parte del Estado.

Nuevo independentismo de masas

El giro independentista de *Convergència* se concretó en la reclamación al gobierno del PP de un *Pacto Fiscal* o concierto económico para Catalunya —ahora rescatado por ERC—. Este fue rechazado por Mariano Rajoy el 20 de septiembre de 2012, desoyendo los consejos de Enric Millo, delegado del gobierno en Catalunya y exdirigente de *Unió Democràtica de Catalunya* (UDC), socio minoritario de la coalición *Convergència i Unió* (CiU), para crear una comisión de estudio sobre el tema. A su vuelta a Barcelona, Mas fue recibido como un héroe de la patria, lejos de las imágenes del helicóptero.

La propuesta del *Pacto Fiscal* se difundió cuando la consigna del *Espanya ens roba*, acuñada por el letrado Alfons López Tena, tenía una enorme popularidad. Si no existiese un expolio fiscal y un drenaje de recursos hacia Madrid, el gobierno catalán no se habría visto obligado a realizar esos brutales recortes y Catalunya sería la “*Suïça del Mediterráneo*”, se decía. El rechazo de Rajoy al *Pacto Fiscal* dejaba abierto el camino a la transición nacional y el

ejercicio del *derecho a decidir*, eufemismo de la autodeterminación.

Sería un grave error atribuir el ascenso del *procés* únicamente a una hábil maniobra de los estrategas convergentes.

En 2009, antes de la sentencia del TC sobre el *Estatut*, se produjo una movilización social con las consultas sobre la independencia iniciadas en Arenys de Munt en septiembre de 2009, que se prolongó durante un año y medio en diversas oleadas culminando en Barcelona en abril de 2011. Estas consultas informales sentaron el marco para la constitución de la *Assemblea Nacional de Catalunya* en marzo de 2012, donde confluyeron las diversas plataformas independentistas que proliferaron durante esos años.

Por otro lado, *Òmnium Cultural*, la histórica entidad fundada en 1961 para promocionar la lengua y la cultura catalanas, se reconvertía al independentismo, bajo la presidencia de Muriel Casals, exmilitante del PSUC. Además, en diciembre de 2011, se constituía la *Associació de Municipis per la Independència* (AMI), que agrupaba a 787 municipios, y estaba presidida por Carles Puigdemont, alcalde de Girona, antes de ser llamado a la presidencia de la Generalitat para sustituir a Artur Mas.

La *Diada* de 2012 fue una auténtica demostración de fuerza de la ANC, entonces liderada por Carme Forcadell, exconcejala de ERC en Sabadell. Esta manifestación reunió a 1,5 millones de personas, según la Guardia Urbana. Esta coreográfica capacidad de convocatoria se revalidó en la *Diada* de 2013 con la *Vía Catalana*, que organizó una cadena humana de 400 km desde Le Perthus a Vinaroz. En 2014, en el centro de Barcelona, se formó una gigantesca *V de victoria* que reunió a 1,8 millones de personas.

La ANC fue la expresión organizativa del nuevo independentismo de masas. Debemos a Adolf Tobeña un análisis sociológico del movimiento, elaborado sobre la base de datos oficiales y públicos, que muestra un país dividido en dos mitades, donde la lengua materna, el nivel de renta y los estudios marcan la cesura.

Para simplificarlo hasta la caricatura, el retrato robot del militante independentista corresponde a una persona de lengua materna catalana, clase media y estudios secundarios o superiores. Solo un 13% de los encuestados cuya lengua materna es el castellano apoyaba la secesión, el denominado *efecto Gabriel Rufián*, líder de la plataforma Súmate. También se apreciaba un matiz generacional que tiene su correlato político. Los votantes de Junts suelen ser mayoritarios entre los mayores de 50 años, los de ERC entre los 30 y 50, y los de la CUP se encuentran por debajo de los 30.

En estos años de ascenso del *procés*, emergió un independentismo de aluvión que unificó ideológicamente a las clases medias catalanohablantes, anteriormente atomizadas y despolitizadas, en torno a la reivindicación de la independencia como *“utopía disponible”*, por utilizar la expresión de Marina Subirats. Otros autores, como Steven Forti, lo han caracterizado como una variedad de los nacional-populismos que triunfan en Occidente.

Una de las claves de su éxito radicó en una tríada virtuosa.

1. Los partidos independentistas trabajaban en el frente institucional para preparar el camino hacia la independencia mediante una serie de reformas legislativas (“*de la ley a la ley*”) que permitieran una transición pacífica y el reconocimiento internacional de la República catalana.
2. Las entidades soberanistas movilizaban a las bases sociales en la calle y ejercían presión sobre los partidos.
3. Los medios de comunicación, especialmente los públicos de la *Corporació Catalana de Ràdio i Televisió*, difundían las consignas y convocaban a las movilizaciones.
También, en este periodo, se produjo la eclosión de los medios *digitales indepés*, generosamente subvencionados, y del uso masivo de las redes sociales.

Implosión del sistema de partidos

Uno de los efectos del *procés* fue la implosión del sistema de partidos catalán, que había estado caracterizado por dos grandes fuerzas centrales, CiU y PSC, que se repartían el poder autonómico y municipal. ERC e ICV operaban como formaciones minoritarias y correctoras por la izquierda de convergentes y socialistas en los ejes nacional y social, respectivamente. Todas ellas se reivindicaban del catalanismo, excepto el PP.

Este sistema funcionaba mediante el fenómeno de la abstención dual y selectiva.

- En los distritos de las clases medias catalanohablantes, de mayoría nacionalista, la participación en las generales y autonómicas era muy semejante.
- En los barrios del Área Metropolitana, de clase trabajadora mayoritariamente castellanohablante, se daba un diferencial entre la participación en las generales —donde se imponían los socialistas— y las catalanas, donde una parte importante de ese electorado se abstenía, facilitando mayorías convergentes.

El *procés* rompió con este comportamiento dual, con elevados porcentajes de participación en los barrios contrarios a la secesión, lo que favoreció a Ciudadanos (Cs).

La confesión de Jordi Pujol en verano de 2014 y la acumulación de casos de corrupción (*Palau de la Música, ITV, tres por ciento...*) condujeron a la disolución de Convergència y a su fallida reconversión en el PDeCAT en julio de 2016, liderado por Artur Mas. Su socio, UDC, el histórico partido democristiano fundado en 1931, se escindió en dos facciones: una independentista, integrada en Junts, y otra autonomista, *Units per Avançar*, que se sumó a las listas del PSC.

El debate sobre el “*derecho a decidir*” también abrió profundas grietas en los sindicatos y partidos de la izquierda parlamentaria.

- Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), la formación ecosocialista heredera del PSUC, fundada en 1987, se había incorporado a las confluencias con Podemos y Barcelona en Comú de Ada

Colau. Las contradicciones entre federalistas e independentistas en la coalición condujeron a una indefinición sobre la cuestión de la independencia —el *monotema* de la política catalana—, que finalmente provocó el estallido de la coalición y la extinción del partido en 2019.

- El PSC sufrió una profunda crisis interna. Gran parte de los dirigentes catalanistas que habían liderado los gobiernos del tripartito se pasaron al independentismo, la mayoría a ERC. Ejemplos de ello fueron Ernest (Tete) Maragall, Marina Geli, Antoni Castells, Joaquim Nadal, Montserrat Tura y Joan Ignasi Elena. Los socialistas cayeron de los 50 diputados de Pasqual Maragall en 1999 a los 14 escaños de Miquel Iceta en 2015. Una caída que parecía avalar la apuesta de ERC de sustituir al PSC como la izquierda nacional en la futura República catalana. El desplome del PSC se correspondió con el ascenso de Ciudadanos (Cs), que entró en el *Parlament* por primera vez con tres diputados en 2006 para oponerse a la política lingüística de la Generalitat. Su crecimiento fue vertiginoso en los años del *procés*. Así, fue la segunda fuerza política en las plebiscitarias del 2015 con 25 diputados y la primera con 36 en las autonómicas de 2017, convocadas por Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Cs fue la expresión política del voto útil contrario a la secesión. Su desaparición resulta una prueba adicional del fin del *procés*.

2. Ascenso del movimiento independentista (2012-2017)

El rechazo al *Pacto Fiscal* y la masiva *Diada* de 2012 condujeron a Artur Mas a adelantar las elecciones al 25 de noviembre, donde reclamó una amplia mayoría para, como Moisés, conducir al país a la tierra prometida de la independencia. Por el contrario, recibió un severo correctivo al perder 12 escaños, que casi se correspondían a los 11 ganados por ERC. Además, la CUP entraba por primera vez en el *Parlament* con tres diputados liderados por David Fernández. Estos resultados indicaban el giro a la izquierda del movimiento independentista. Oriol Junqueras, líder de ERC, desempeñó en esta breve legislatura el doble papel de líder de la oposición y socio parlamentario de CiU.

El 8 de abril de 2014, el Congreso de los Diputados rechazó la delegación de las competencias exclusivas del Estado, solicitada por el *Parlament*, para celebrar el referéndum de autodeterminación. Mas anunció ese mismo día que esta negativa no impediría la consulta a la ciudadanía.

El referéndum sobre la independencia de Escocia, pactado entre el gobierno conservador británico de David Cameron y Alex Salmond del *Scottish National Party* (SNP), estuvo muy presente en el debate político. Mas, respaldado por el movimiento nacionalista, pedía a Rajoy las mismas condiciones que un Estado que entonces aún pertenecía a la Unión Europea (UE). La derrota de los independentistas escoceses el 18 de septiembre de 2014 supuso un revés para los nacionalistas catalanes en la medida que hubiera abierto una vía en la UE para el reconocimiento de nuevos Estados. No obstante, persistió esa comparación entre un Estado realmente democrático como Gran Bretaña o Canadá y otro pseudodemocrático como el Reino de España que impedía el ejercicio del “derecho a decidir”.

A pesar de la suspensión del TC, a instancias del gobierno del PP, las votaciones se celebraron el 9 de noviembre de 2014 para responder a la doble pregunta: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado?” y “¿En caso afirmativo quiere que este Estado sea independiente?”. La jornada fue un gran éxito político, sellado por el abrazo entre Mas y Fernández, que superó las expectativas de los organizadores cuando 2.344.828 catalanes acudieron a las urnas, el 80,9% a favor de la independencia. Unas cifras semejantes a los votos de los tres partidos independentistas y a las de participación en las Diadas, pero con una elevada abstención concentrada en los distritos del Área Metropolitana de Barcelona.

Doce días después, el fiscal superior de Catalunya presentaba una querrela contra Mas y las *conselleres* Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia, prevaricación y malversación, por los que fueron condenados a penas de inhabilitación el 13 de marzo de 2017.

El *president* Mas convocó elecciones adelantadas, que calificó de plebiscitarias, el 27 de septiembre de 2015, tras alcanzar un acuerdo con las organizaciones independentistas y ERC cuyo objetivo era convertirlas en el referéndum de autodeterminación prohibido por el Estado español. El movimiento independentista echó toda la carne en el asador en la candidatura unitaria de Junts pel Sí, que en Barcelona estuvo encabezada por Raül Romeva, ex eurodiputado de ICV, Carme Forcadell (ANC) y Muriel Casals (OC). Artur Mas y Oriol Junqueras, los verdaderos candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Generalitat, iban en cuarta y quinta posición. El famoso cantautor Lluís Llach fue el cabeza de lista por Girona.

Aquí se ha de señalar la pulsión hacia la unidad del movimiento nacionalista -más allá de las diferencias ideológicas- frente al Estado opresor: de la *Solidaritat Catalana* a la *Assemblea de Catalunya*, pasando por la *Crida* hasta la *Solidaritat*. Esta pulsión tuvo su expresión política en esta lista unitaria que no ocultaba la descarnada pugna entre postconvergentes y Esquerra por la hegemonía del movimiento, sin la cual resulta incomprensible entender la lógica del *procés*. La CUP rechazó la invitación a integrarse en la lista unitaria y presentó candidatura propia, pero reconoció el carácter plebiscitario de los comicios; es decir, si había una mayoría de votos a favor de la independencia, esta habría de hacerse efectiva inmediatamente. Los partidos constitucionalistas le negaron ese carácter y las consideraron unas elecciones autonómicas más.

El veredicto de las urnas estuvo por debajo de las expectativas de los independentistas. Con una elevada participación (77,7%) —diez puntos superior a las anteriores catalanas— no se superó la barrera del 50% de los votos. Junts pel Sí y la CUP, rozaron los dos millones de votos (1,9) y el 47,8% de los sufragios. Tampoco, con 62 diputados, la lista unitaria alcanzaba la mayoría absoluta de 68 diputados, que solo podía lograr con los 10 escaños de la CUP, que triplicó su representación parlamentaria. Como afirmó en la noche electoral Antonio Baños, cabeza de la lista de la CUP, se habían ganado las elecciones, pero perdido el plebiscito. No obstante, los dirigentes de Junts pel Sí presentaron estos resultados como una gran victoria. El 47,8% de los votos de Junts pel Sí más la CUP superaban el 39,1% de los partidos constitucionalistas (PSC, Cs y PP). Un cálculo que excluía al 8,9% de los Comunes. No superar el 50% de los votos impedía proclamar la independencia —se argumentaba—, pero permitía iniciar el proceso hacia ella creando las estructuras de Estado. El proceso finalizaría con un referéndum vinculante donde la

ciudadanía ratificaría si quería que Catalunya fuese un Estado independiente. Al fin y al cabo, por primera vez había una mayoría absoluta independentista en el *Parlament de Catalunya*.

En el bando constitucionalista, Cs fue el gran beneficiado de la extrema polarización en el eje nacional. Con 736.363 votos, pasó de 9 a 25 diputados y se aupó como segunda fuerza política del país. Mientras tanto, el PSC, sumido en una grave crisis interna, con medio millón de votos, caía de los 20 a los 14 diputados.

La legislatura empezó con la declaración del pleno del *Parlament*, el 9 de noviembre de 2015, que proclamaba el inicio del proceso para la creación del Estado catalán independiente en forma de república y la apertura del proceso constituyente, “ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo”. Una declaración recurrida y anulada por el TC.

La CUP, en medio de una gran división interna entre la facción más nacionalista (*Poble Lliure*) y la más anticapitalista (*Endavant*), exigió y obtuvo la cabeza de Artur Mas. No podía ser que Mas, delfín de Pujol, representante de la burguesía catalana y salpicado por los escándalos de corrupción, pilotara el pasaje de la autonomía a la independencia. Especialmente cuando el movimiento viraba hacia la izquierda. El mismo día que expiraba el plazo para la convocatoria automática de repetición electoral, Mas designó a Carles Puigdemont, alcalde de Girona y presidente de la AMI que, a diferencia de Mas, siempre había militado en el sector independentista de *Convergència*. Así, la CUP se postulaba como la garante de que el *procés* iba a llegar hasta el fin, impidiendo las tentaciones de los convergentes de pactar con Madrid en el último momento.

Máquinas nacionalistas

El deseo de unidad nacionalista —*fer pinya*— fue alimentado por la estrategia del PP, encarnación de ese Estado español centralista, opresor y anticatalán. Con mayoría absoluta, Mariano Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del Opus Dei y del núcleo duro del PP catalán, diseñaron una estrategia de combate contra el independentismo sobre dos ejes: la acción punitiva de la justicia y los cuerpos policiales, junto a la guerra sucia a cargo de la policía patriótica y los medios de comunicación afines al PP.

Aquí debemos esbozar el funcionamiento de las máquinas nacionalistas que necesitan de un enemigo exterior y otro interior para asegurar su cohesión interna y retroalimentarse. En el nacionalcatolicismo franquista, la Unión Soviética cumplió bien que mal esa función de enemigo exterior, mientras que demócratas, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes y vascos (la antiEspaña) cumplían la función de enemigos interiores. El nacionalismo de derechas español, contaminado por el franquismo, emprendió con José María Aznar a través de la FAES, una operación de renovación y rearme ideológico que buscaba pasar página del franquismo, aunque sin acabar de romper con el cordón umbilical. Un “patriotismo constitucional” que mantenía la hostilidad a los nacionalismos vasco, catalán y gallego como una amenaza latente a la unidad nacional y al orden constitucional. Justamente, el *procés* independentista materializaba todas esas amenazas latentes. La

torpeza política del PP en la gestión de la crisis catalana fue uno de los factores —no el único— que favorecieron extraordinariamente el crecimiento de Vox.

Para el nacionalismo catalán, el Estado centralista español, y en menor medida francés, eran los enemigos exteriores que oprimían a la nación catalana. Los catalanes, *botiflers*, que colaboran con ese enemigo exterior asumen el rol de enemigos internos. Ahora bien, existe una diferencia sustancial: mientras el nacionalismo español es un nacionalismo de Estado, en cierto modo satisfecho; el catalán es un nacionalismo sin Estado, pero que aspira a tenerlo en la medida que el Estado soberano es el templo de la Nación.

Choque de trenes

En su discurso de investidura, Puigdemont se comprometió a liderar una legislatura constituyente de 18 meses de duración que prepararía las estructuras de Estado, sortearía los obstáculos para celebrar el referéndum e impulsaría la acción exterior para el reconocimiento internacional de la República catalana. El voto negativo de la CUP a los Presupuestos de la Generalitat, en junio de 2016, le condujo a someterse a una moción de confianza (28 y 29 de septiembre de 2016). A cambio del compromiso de convocar un referéndum vinculante en un año, la CUP votó los Presupuestos sin los cuales sería imposible celebrar la consulta.

Los atentados islamistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que no estaban en el guion, no provocaron un movimiento a la unidad cívica, como sucedió en Francia con *Charlie Hebdo*, sino que mostraron la profunda polarización de la sociedad catalana. Esto se evidenció en la gran tensión experimentada en la manifestación de condena donde Felipe VI y Mariano Rajoy no fueron bien recibidos. Desde los medios independentistas se acusó a los servicios secretos españoles de connivencia con la célula yihadista de Ripoll —donde, posteriormente, surgiría la formación de extrema derecha independentista *Aliança Catalana*.

Uno de los rasgos de los años de ascenso del *procés* fue que las grandes decisiones se tomaron al calor de la *Diada*. Así, en un clima de máxima crispación y entre las protestas airadas de la oposición, el 6 y 7 de septiembre se aprobaron las dos leyes de desconexión (*Referéndum* y de *Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República*) en lectura única. Estas fueron diseñadas por Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del TC y director del *Consell Assessor per a la Transició Nacional*, creado por la Generalitat en febrero de 2014 para construir las estructuras de Estado y conducir el pasaje a la independencia. De un plumazo y por mayoría simple se derogaba la Constitución española y el *Estatut d'Autonomia*, cuando —argumentan los partidos constitucionalistas— para modificar el *Estatut* se precisa una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara.

En estas tormentosas y maratonianas sesiones, transmitidas por TV3, se asistió en directo al estallido del grupo de los *Comunes*. Ambas leyes fueron suspendidas por el alto tribunal. Con estos precedentes, el 11 de septiembre de 2017, *La Diada del Sí*, fue un gran éxito. Reunió un millón de personas, según la Guardia Urbana. Si todo iba bien —se decía— sería la última bajo soberanía española. En realidad, sirvió para preparar la campaña del referéndum iniciada el 15 de septiembre.

Las cosas adquirieron un feo cariz desde el 20 de septiembre con la macrooperación de la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum. A primera hora de la mañana, los agentes entraron en cuatro *conselleries* de la Generalitat y se practicaron catorce detenciones de altos cargos y funcionarios. También se registraron diversas empresas privadas. A media mañana, una gran multitud se congregó frente a la céntrica sede de la *Conselleria d'Economia* en Barcelona, cortando el tráfico e impidiendo la salida de la comitiva judicial y de los guardias civiles, que hubieron de ser protegidos por un cordón de los *Mossos d'Esquadra*.

Las protestas se extendieron a las principales ciudades del país. A las 21 h, Rajoy compareció para advertir que habría peores consecuencias si la Generalitat no desconvocaba el referéndum. Los más de seis mil agentes de los antidisturbios anclados en el puerto de Barcelona —los *piolines*, por el dibujo que decoraba el crucero— daban fe de ello. Finalmente, a medianoche, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y OC, subidos en un todoterreno vandalizado de la *Benemèrita*, desconvocaron la concentración. Por estos hechos, ambos ingresaron en prisión provisional el 16 de octubre de 2017 y fueron condenados a 9 años de prisión e inhabilitación por el delito de sedición por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019.

Hasta el 1 de octubre de 2017 se asistió a un juego del gato y el ratón entre la judicatura y los cuerpos policiales contra los organizadores de la consulta para requisar las papeletas y las urnas, de donde surgirían los *Comitès en Defensa del Referéndum* (CDR). La pugna se saldó con la victoria de estos últimos: el 1 de octubre hubo urnas y papeletas.

Desde las 10 de la mañana, las televisiones emitían en directo las imágenes que dieron la vuelta al mundo de las brutales entradas y desproporcionadas cargas de la Guardia Civil y Policía Nacional fuera y dentro de los colegios electorales. La jornada fue una gran victoria política del movimiento independentista. No solo porque había conseguido organizar el referéndum contra el aparato del Estado, sino porque, según los datos del gobierno catalán, participaron 2,2 millones de personas (43% del censo electoral), 770.000 de las cuales no pudieron hacerlo por la acción policial. El sí a la independencia se impuso con un aplastante 90,1% de los votos.

Esta torpe respuesta represiva dio a los independentistas las imágenes que buscaban y justificó el éxito de la huelga general del 3 de octubre. Esa misma noche, Felipe VI compareció ante las cámaras para reafirmar su compromiso con la unidad nacional y la estrategia represiva de Rajoy. La abdicación de su padre, Juan Carlos I, el 18 de junio de 2014, asediado por los escándalos de corrupción, había dejado muy malparada la imagen de la monarquía.

Paralelamente, la entidad constitucionalista *Societat Civil Catalana*, como la ANC pero al revés, organizó las masivas manifestaciones contra la secesión del 8 y 29 de octubre de 2017 con parlamentos de Mario Vargas Llosa, Josep Borrell y Paco Frutos que mostraron la extrema polarización de la sociedad catalana y que buscaban desmentir el mantra de que solo la derecha y la extrema derecha se oponían a la secesión. En esos días, las principales empresas y entidades financieras, ante la alarmante fuga de depósitos, cambiaron su sede fiscal.

El 27 de octubre de 2017 fue la jornada decisiva del *procés*. Con pocas horas de diferencia, el *Parlament* declaraba la independencia y el Senado aplicaba por primera vez el artículo 155

de la Constitución, que disolvía el legislativo y el ejecutivo autónomo y convocaba elecciones el 21 de diciembre en el mínimo plazo legal.

La reacción del Gobierno y las elecciones del 21-D

Ese día finalizó el proceso independentista propiamente dicho. Según el testimonio de Santi Vila, el lehendakari Íñigo Urkullu hizo de mediador entre los gobiernos español y catalán en estos términos: si Puigdemont no proclamaba la independencia y convocaba elecciones, Rajoy no aplicaría el 155. La presión de los *consellers* de ERC, que amenazaron con abandonar el gobierno, y de las bases del movimiento impidieron evitar el choque de trenes. La multitud congregada en la *plaça Sant Jaume*, frente al *Govern* de la Generalitat, esperó en vano que se arriara la bandera española y que Puigdemont, como hiciera Macià desde ese mismo balcón en 1931, proclamase la República Catalana. Las noticias sobre la aplicación del 155 vaciaron la plaza. Tampoco se produjo ningún reconocimiento internacional a la Declaración Unilateral de Independencia. A pesar de los esfuerzos del *Consell de Diplomacia Pública de Catalunya* (Diplocat), creado por la Generalitat en noviembre de 2012.

Dos días después, el fiscal general del Estado anunciaba la presentación de una querrela en la Audiencia Nacional contra Puigdemont, el ejecutivo catalán y la mesa del *Parlament* por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El 31 de octubre, Puigdemont comparecía en Bruselas en una multitudinaria rueda de prensa, flanqueado por los *consellers* de ERC Toni Comín, Meritxell Serret y de Junts, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que habían elegido el camino del exilio. Por el contrario, la presidenta del *Parlament*, Forcadell, el vicepresidente Junqueras y ocho *consellers* de la Generalitat comparecían ante el juez, que decretó prisión incondicional sin fianza a todos ellos, excepto a Santi Vila quien, horas antes de la declaración de independencia, había presentado la dimisión del *Govern*, después de pagar una fianza de 50.000 euros.

Las duras sentencias del Tribunal Supremo contra los líderes del *procés*, en octubre de 2019, provocaron las últimas grandes movilizaciones del movimiento independentista, con la ocupación del Aeropuerto del Prat a cargo de *Tsunami Democràtic*, impulsado desde Waterloo, y las noches de disturbios en el centro de Barcelona.

En las autonómicas del 21 de diciembre de 2017, convocadas por Rajoy, los tres partidos independentistas revalidaron la mayoría absoluta. Se inició entonces un período *postprocesista* de lento reflujo electoral y desmovilización del movimiento nacionalista, con la pandemia de por medio. Si en los años de ascenso del *procés*, el símbolo fue la *estelada* —la bandera independentista— que sustituía a la *senyera* autonomista, el lazo amarillo sería el emblema de la resistencia frente a la represión del Estado.

Un período de seis años (2018-2024) bajo las presidencias de Quim Torra (Junts), inhabilitado por desobediencia en septiembre de 2020, y Pere Aragonès (ERC), que fue clausurado con la investidura de Salvador Illa en agosto de 2024 y que analizaremos en una segunda parte de este análisis.

Lecciones del *procés*

Hay que señalar que la serie histórica de las encuestas del CEO revela un incremento sostenido del apoyo a la secesión desde 2012, que llegó a su máximo en el barómetro de 2017, cuando un 48,6% de los encuestados se mostró partidario de la independencia, frente a un 46,1% en contra. La tendencia se revirtió desde 2019 y ha ido cayendo sostenidamente. En el barómetro de julio de 2024, un 39% es partidario de la independencia, frente a un 53% en contra. De los dos millones de votos de las tres formaciones independentistas en las autonómicas de 2015 y 2017, a los 1,2 millones de las catalanas de 2024.

La principal lección de los años de ascenso del *procés* radica en que nos proporciona una compleja radiografía de la sociedad catalana, de sus segmentaciones y contradicciones. Desde el punto de vista sociológico, muestra la polarización en torno a dos vectores: la clase social (cuantificable por la renta, el nivel de estudios o la zona de residencia) y la identidad nacional, que, a grandes rasgos, se corresponde con el uso de la lengua catalana.

Desde una perspectiva política, los partidos en Catalunya se alinean en torno a dos ejes: social (derecha/izquierda) y nacional (catalanismo/españolismo). En los tripartitos de izquierda (PSC, ICV y ERC), el eje social predominaba. Sin embargo, el desarrollo del *procés* mostró cómo en torno al eje nacional se configuraban dos bloques antagónicos: independentistas (Junts, ERC y CUP) frente a constitucionalistas (PP, Cs y PSC), con los *Comunes* en tierra de nadie.

El comportamiento de la CUP y las contradicciones de la izquierda federalista (PSC) y confederalista (Podemos) revelan que el eje nacional se impuso rotundamente al social. Como se pregunta Josep Maria Antentas, ¿hasta qué punto el 15M y el movimiento independentista se neutralizaron mutuamente? En cualquier caso, la estrategia de la derecha nacionalista parece dar cumplimiento al teorema de Eric Hoffer, especialista en movimientos de masas:

“El problema de un movimiento de masas es a menudo una cuestión de sustituir un movimiento por otro. Se puede desactivar una protesta social promoviendo un movimiento religioso o nacionalista.”

Aquí convendría caracterizar correctamente a Junts, donde conviven el *gen convergente*, por usar la expresión de Enric Juliana, y los representantes de diversas procedencias del nuevo independentismo de masas, cohesionado por el liderazgo carismático de Puigdemont.

Desde el punto de vista teórico, el *procés* abrió un debate en la izquierda catalana sobre el carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado español y el derecho a la autodeterminación de las naciones, que excede el marco de este análisis y que merece un tratamiento pormenorizado. Solo hay que indicar que las contradicciones y la falta de alternativas claras por parte de la izquierda favorecieron que el rechazo a la secesión fuese capitalizado desde la derecha por Ciudadanos, que conseguía sus mejores resultados en los distritos de la alta burguesía barcelonesa y en los barrios de la periferia.

Finalmente, hemos de apuntar, siguiendo las tesis de Miroslav Hroch, especialista en movimientos nacionalistas occidentales y estudioso de su composición social, a las causas del fracaso del *procés*.

El movimiento nacionalista contó con un amplísimo apoyo entre las clases medias catalanohablantes del Área Metropolitana y en los municipios de la Catalunya interior, pero no lo tuvo entre la alta burguesía, con numerosos intereses económicos en España, ni entre la clase trabajadora castellanohablante. En estas condiciones, resultaba muy difícil conseguir la amplia mayoría social suficiente tanto para tener el control efectivo del territorio, como para lograr el reconocimiento internacional de un Estado independiente.

Bibliografía

AMAT, Jordi. La confabulación de los irresponsables. Ed. Anagrama, Barcelona, 2017.

ANTENTAS, Josep Maria. Espectros de octubre (per)turbaciones y paradojas del independentismo catalán. Ed. Sylone, Barcelona, 2018.

BALFOUR, Sebastian. La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el Área Metropolitana de Barcelona (1936-1988). Ed. Alfons el Magnànim, València, 1994.

FRADERA, Josep Maria. La tradició a la intempèrie, dentro de La rectificació. Reflexions sobre la Catalunya del demà. Ed. Destino, Barcelona, 2006.

HROCH, Miroslav. La naturalesa de la nació. Ed. Afers, Universitat de València, 2001.

HOFFER, Eric. El verdadero creyente. Sobre el fanatismo y los movimientos sociales. Ed. Tecnos, Madrid, 2009.

PETRAS, James. Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles. Ajoblanco, Barcelona, 1995.

SANTAMARIA, Antonio. Convergència Democràtica de Catalunya. De los orígenes al giro soberanista. Ed. Akal, Madrid, Madrid, 2014.